

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 5° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-16554-2020
CARATULADO : VERA/TRANSELEC.S.A

Santiago, dieciocho de Julio de dos mil veintidós

VISTOS:

A folio 1, con fecha 28 de octubre de 2020, comparece don **HERIBALDO HERNÁN VERA MILLAR**, cédula de identidad N° 8.901.296-1, casado, Contador Público y Auditor, Ingeniero Comercial en Administración de Empresas y Abogado, por sí, domiciliado en Camino El Escorial S/N, Portada de Huequén, comuna de Paine, Región Metropolitana, quién interpone interpongo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra de **TRANSELEC S.A.** empresa del giro de Transmisión Eléctrica, Rut N° 76.555.400-4, representada legalmente por don Andres Kuhlmann Jahn, cédula de identidad N° 6.554.568- 3 o don Arturo Le Blanc Cerda, cédula de identidad N° 10.601.441-8, todos domiciliados en Orinoco N° 90, Piso 14, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

Señala el actor, que es un ex empleado de la empresa Eldu SpA, empresa de capitales españoles donde desempeñó los cargos de Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Administración y Finanzas del Grupo Eldu Chile, este último cargo ejercido al alero de un contrato de externalización de servicios de administración, firmado entre Eldu SpA con Eldu Ingeniería SpA y la sociedad Eldu S.A. Agencia Chile, formando las tres citadas empresas el grupo Eldu Chile.

Expone que Transelec firmó un contrato de ejecución de obras con Eldu Ingeniería SpA, sociedad especializada en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión. Dicho contrato se denominó "Proyecto STA-3544 "Ampliación S/E Carrera Pinto 220 Kv", ubicado en la región de Atacama." Este contrato, señala, fue adjudicado con fecha 09 de octubre del año 2015, por la suma de 3.913.020 dólares, más 31.039,58 Unidades de Fomento. Agrega que en este contrato la empresa Eldu Ingeniería SpA, tuvo a la fecha de término o intervención unilateral del contrato por parte de la demandada, una pérdida que alcanzó al 90% del precio del contrato.

Añade que la demandada a través de su personal no respetó el principio de probidad, causándole daños irreparables y gratuitos, toda vez que su contrato de trabajo era con Eldu SpA, pues le fueron imputados falsos delitos de estafa y apropiación indebida, al igual que a todos los ejecutivos españoles, siendo el actor el único chileno involucrado y sin ser parte de la dotación de Eldu Ingeniería SpA., causándole en consecuencia un daño sin fundamento. Continúa indicando que adquirió el convencimiento que el propósito de Transelec sólo era perjudicar a ejecutivos del Grupo Eldu Chile e influir en la investigación que llevó adelante la Fiscalía Local de Las Condes, puesto que contrató a un ex Fiscal de dicha Fiscalía y a un abogado vinculado a la Corte de Apelaciones de Santiago, estrategia que la demandada mantuvo hasta último minuto -obstruyendo la investigación- lo que



no prosperó por lo ilógico e irracional de la querella, por cuanto, no cumplía ningún elemento de los tipos penales que se le imputaron arbitrariamente, razón suficiente que llevó a la Fiscalía Local de Las Condes, a solicitar después de un año y ocho meses de investigación, el sobreseimiento definitivo del actor, lo que fue acogido por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por sentencia firme y ejecutoriada de fecha 21 de octubre de 2019, en causa RUC 1810008340-6, RIT 1548-2018.

Reseña el actor su trayectoria profesional, señalando que ejerció durante 18 años funciones de responsabilidad superior en el ámbito público y 6 años en el ámbito privado en cargos de Jefe de Auditoría, Administración y Finanzas y similares, teniendo más de 15 años de estudios. Señala que trabajó 13 años en la Contraloría General de la República, para luego ser 5 años Contralor Interno en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Posteriormente trabajó 2 años en SGS Chile y 4 años como Gerente de Administración y Finanzas en Eldu SpA, carrera profesional que a sus 54 años se vio finalizada por las acusaciones de Transelec.

Expone que en el marco del contrato señalado anteriormente, la demandada pagó 4 facturas a Eldu Ingeniería SpA, correspondiente a Estados de Pagos de la obra, siendo estos últimos, verificados, validados y autorizados por la Inspección Técnica de Obra y aprobados y autorizados por directivos de Transelec, y los dineros ingresaron a la cuentas Eldu Ingeniería habiéndose utilizado el mismo para hacer pagos en virtud de la autonomía financiera de la última, sin tener el actor decisión sobre las decisiones financieras señaladas, ya que las claves bancarias y pagos desde la cuenta corriente de las empresas del Grupo Eldu las controlaba y autorizaba el Contralor de la matriz en España. No obstante, indica, que los pagos pertenecían al precio del contrato, el 23 de febrero de 2018 la demandada interpuso una querella criminal por delitos de apropiación indebida y estafa, en contra de los directivos españoles y en contra del actor como único chileno de la empresa Eldu Ingeniería SpA, la que se tramitó en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

Señala que la Fiscalía Local de Las Condes luego de investigar 1 año y 8 meses solicitó al Tribunal de Garantía audiencia para discutir su sobreseimiento definitivo por no estar involucrado en los hechos, y en ella se determinó que los delitos eran inexistentes y falsos, sobreseyéndosele definitivamente de los delitos de estafa y apropiación indebida, y el propio querellante Transelec en la audiencia señalada realizada el día 21 de octubre de 2018 habría reconocido su actuar doloso pues se habría allanado del sobreseimiento del delito de apropiación indebida, insistiendo en el de estafa, allanamiento que acreditaría el actuar doloso y el ilícito civil cometido por la demandada a través de sus ejecutivos en la falsa estafa.

En consecuencia, la demandada habría incurrido en responsabilidad civil extracontractual por realizar en la querella criminal falsas imputaciones en delitos de apropiación indebida y estafa en contra del actor, de los que fue sobreseído lo que sin embargo, no borra el enorme e inefable daño que le causó y causa dicha querella en su trayectoria laboral, honra, prestigio, fama y futuro profesional, además del irreproducible dolor y pesar a su entorno, familia y a él, poniéndose en movimiento maquinaria judicial por delitos que no existieron, causándole delitos de lucro cesante y daño moral.



En cuanto al derecho señala el actor que fue sobreseído por las causales del artículo 250 letras a) y b) del Código Procesal Penal, es decir “cuando los hechos investigados no fueran constitutivos de delito” y “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”. Ello en estrecha relación con los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, que hablan de los efectos de la cosa juzgada penal en materia civil. Expone que para que exista responsabilidad es necesario que el daño ´provenga de un comportamiento objetivamente ilícito” y que de los antecedentes acompañados se tiene por acreditado el proceder objetivo y absolutamente ilícito de la demandada, por la declaración firme y ejecutoriada de los delitos de estafa y apropiación indebida.

Señala que los hechos antes descritos claramente configurarían responsabilidad extracontractual, existiendo la necesidad jurídica del demandado de indemnizar al demandante por los daños causados, conforme disponen los artículos 2314, 2320 inciso 1º, 2322 inciso 1º y 4º, 2322 inciso 1º y 2329 todos del Código Civil. En el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, Transelec es responsable por el hecho de sus dependientes, específicamente por los hechos cometidos en la causa penal ya señalada, responsabilidad ampliamente reconocida por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, siendo la demandada capaz de cometer estos ilícitos y se podría aplicar la presunción general de responsabilidad y de relación causal por hechos propios establecida en el artículo 2329 ya señalado, debiendo presumirse la culpa de la demandada. Cita al efecto ejemplos jurisprudenciales de aplicación de la norma señalada.

Añade que los ilícitos de la demandada vulneran las disposiciones de la Constitución Política de la República, en específico el artículo 19 N° 1 por atentar contra la integridad psíquica del actor.

Para la procedencia de la responsabilidad extracontractual, señala, se deben cumplir los siguientes requisitos: 1) un hecho ilícito ejecutado con dolo o culpa; 2) un daño o perjuicio a la víctima; 3) Un nexo causal o relación de causalidad entre el hecho ilícito realizado con dolo o culpa y el perjuicio o daño causado; y 4) Capacidad del agente que causó el daño. En la especie concurrirían todos ellos, el primero por la querella presentada que resultó sobreseída y el allanamiento de la demandada. Además, los dependientes de Transelec, sabían o debían saber que los pagos ejecutados por la obra realizada no conllevan responsabilidad penal, infringiendo la *lex artis* de la industria. En cuanto a los daños los analizará separadamente a continuación, existiendo además una relación de causalidad a todas luces evidente aplicando cualquier teoría de atribución al respecto. Además, la demandada es capaz del ilícito pues está asentado en el derecho que las personas jurídicas actúan a través de sus representantes, en este caso un Directorio por ser una sociedad anónima lo que concuerda con las disposiciones del artículo 58 inciso 2º del Código Procesal Penal.

Razona posteriormente respecto al daño y su concepto, la clasificación del daño en patrimonial y moral, reclamando en este caso además los daños previstos como imprevistos. En cuanto al lucro cesante, señala que en este caso en particular, la conducta dolosa y negligente de los dependientes de Transelec S.A., permite cuantificar los perjuicios en dos etapas, la primera corresponde al periodo de un año y ocho meses, referido a la fecha de la presentación de la falsa querella (23 de



febrero de 2018) y la fecha del sobreseimiento definitivo (periodo de investigación), y la segunda etapa, a los efectos patrimoniales negativos inmediato posteriores al sobreseimiento definitivo, por un periodo razonable, en el primer periodo corresponde indemnizar 20 meses desde fines de 2018 en que dejó de trabajar para Eldu SpA y luego un período proyectado de 6 años, es decir 72 meses, periodo razonable hasta que sus antecedentes no sean afectados por la falsa querella. En este sentido, señala que ello se justifica por cuanto los imputados por delitos que merezcan pena aflictiva, en la realidad de los hechos es muy difícil que puedan ser contratados para desempeñar cargos directivos sea en el ámbito público y/o en el ámbito privado. Sólo como ejemplo, existieron hechos públicos y notorios, en el que se informó por la prensa nacional que personas que accedieron a cargos de Alta Dirección Pública, y que por el sólo hecho de tener una causa civil en proceso, fueron cuestionados y tuvieron que dejar sus cargos. En este contexto, desde que se le acusó arteramente de los delitos de apropiación indebida y estafa por los dependientes de la demandada, no tuvo la posibilidad de acceder a cargos de Alta Dirección Pública o en cargos de nivel Gerencial en el sector privado, a pesar de haber postulado reiteradamente, ello porque resulta evidente que ninguna organización contrata en mandos directivos a persona investigadas acusadas de estafador y de apropiación indebida, y ni siquiera ha avanzado etapas en estos procesos de selección, pues se consultan las bases de datos del Poder Judicial y se ha vulnerado entonces su derecho al artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

Señala que también se configura lucro cesante por la denominada “perdida de la chance” o “perdida de la oportunidad”. En este caso, En este caso específico lo que la demandada -Transelec S.A.- destruyó fue el curriculum vitae del actor, su capacidad y calidad profesional, buena fama y experiencia profesional, honra profesional y honorabilidad, estatus laboral, por cuanto, las tres profesiones que ostenta, -Contador Auditor, Ingeniero Comercial y Abogado-, en el ejercicio de las mismas, requieren demostrar un fuerte componente de ética profesional, honorabilidad y probidad, cualidades que obviamente no poseería una persona que ha sido acusada o imputada aunque sea falsamente de estafador y de apropiación indebida, delitos gravísimos que me imputó gratuitamente la demandada de autos. Señala que en los últimos años la jurisprudencia se ha acercado a otorgar indemnizaciones por este concepto, citando ejemplos de ello.

En definitiva, por concepto de lucro cesante solicita \$97.283.100 por el primer período en que no recibió rentas entre su despido y el sobreseimiento, y \$350.219.169 por el segundo período de 72 meses, todo ello en base a su última remuneración recibida que ascendía a \$4.864.155, solicitando \$477.502.260 por este concepto, o la suma menor que se determine.

En cuanto al daño moral que en este caso se configuraría por el agobio o aflicción psíquica que inequívocamente debió soportar y que actualmente soporta, y que se generó por haber figurado como imputado de graves delitos en un proceso criminal, daño que no requiere de prueba, porque la falsedad de la denuncia ha quedado demostrada con la sentencia que le sobreseyó definitivamente, y el peritaje que acompaña y cita en su demanda, daño que fue causado por la conducta de los representantes y ejecutivos de Transelec, daño por el cual solicita la suma de \$120.000.000.



Finaliza señalando que la reparación debe ser íntegra, completa, abarcando daño material o patrimonial, daño moral, más intereses, reajustes y costas.

A folio 10, con fecha 16 de diciembre de 2020 consta la notificación personal subsidiaria a la demandada.

A folio 12, con fecha 8 de enero de 2021, comparece don Arturo Le Blanc, abogado en representación de Transelec S.A. contestando la demanda de autos solicitando su rechazo con costas, comenzando con un breve resumen de la demanda. Posteriormente indica que el día 16 de diciembre de 2015 Transelec celebró con Eldu Pine SpA - hoy Eldu Ingeniería SpA - el denominado contrato STA - 3544 Ampliación S/E Carrera Pinto 220 kv. El grupo Eldu era un grupo de empresas española y operaba en Chile mediante distintas sociedades siendo el demandante su Gerente de Administración y Finanzas, celebrando en dicha calidad contrato en representación de sociedades del grupo.

Expone que el contrato tenía un plazo de 22 meses para terminar en septiembre de 2017 y que consistía en la ampliación de la subestación eléctrica Carrera Pinto en Atacama. Las partes, señala, acordaron que el precio del Contrato se pagaría por etapas o hitos, de acuerdo con los estados de avance. Parte importante del precio debía pagarse al momento de la recepción provisoria (55%) y del estado de pago final (15%), lo cual fue aceptado por Eldu, pero esta última presentó dificultades para la ejecución de este con atrasos e incumplimientos a sus proveedores y contratistas, incumpliendo el plazo y poniendo en riesgo la puesta en servicio. En ese contexto, mediante carta de fecha 6 de octubre de 2017, enviada por su don José Gandarias Torres, Eldu solicitó a Transelec la aprobación de un estado de pago "excepcional" por un 27,5% del precio total del Contrato, supuestamente con el objeto de "atender las necesidades de nuestros proveedores y subcontratistas" y así "inyectar recursos" para concluir las obras. Bajo ese entendimiento, Transelec aprobó la propuesta de Eldu y pagó anticipadamente la cantidad de \$897.969.586. Posteriormente solicitó un segundo pago excepcional por 17,5% del contrato por la misma finalidad a lo que la demandada accedió y pago anticipadamente UF 5.431,93 más USD 684.778,5.

Indica que los problemas persistieron y el Director General de Eldu comunicó a Translec las dificultades reuniéndose los días 11 y 17 de enero de 2018 donde se le solicitó información a la primera, la que nunca entregó, como tampoco se entregó l información solicitada por escrito. El 22 de enero del mismo año el Gerente de Operaciones de Eldu don Luis María Escondrillas intentó imponer sus condiciones para entregar la obra mediante el pago de un 21% de pago excepcional, propuesta que no fue aceptada por Transelec mediante carta de 28 de enero de 2018, ante lo cual Eldu abandonó las obras, retiró al administrador del lugar de faena y dejó los trabajos sin concluir.

Producto de lo anterior, por carta de 30 de enero de 2018 Transelec comunicó a Eldu su decisión de terminar anticipadamente el Contrato y debió asumir los costos para terminar las obras que Eldu dejó inconclusas. Además de abandonar las obras y retirar al administrador del contrato, Eldu dejó cuantiosas deudas con sus proveedores y contratistas y a varios de ellos les había dejado de pagar muchos meses antes, pese a que los pagos excepcionales solicitados a Transelec supuestamente tendrían ese destino. Dado que esta última había hecho pagos excepcionales bajo el compromiso de que los dineros se destinarían a pagar



a dichos contratistas y proveedores con el objeto de terminar las obras -lo cual no ocurrió- Transelec dedujo una querella por los delitos de apropiación indebida y estafa en contra de los principales ejecutivos de las empresas del grupo Eldu involucrados en los hechos. Dentro de ellos estaba el actor, que era el gerente de administración y finanzas de Eldu SpA. En concepto de la demandada, con la información disponible en ese momento, los querellados habían logrado que Transelec liberara fondos en forma excepcional para pagar a contratistas y proveedores, para así concluir la obra, lo cual no era efectivo debido a que dichos querellados sabían que las deudas de Eldu no serían pagadas y muy poco tiempo después esta empresa solicitó su propia liquidación.

Expone que en la querella, cerrada la investigación, en la que no hubo diligencias intrusivas ni cautelares en contra del actor, la defensa de los imputados solicitó el sobreseimiento definitivo por ambos delitos, allanándose la demandada por el delito de apropiación indebida y por el delito de estafa, este último, solo respecto de algunos imputados, entre ellos el actor. El sobreseimiento de don Heribaldo Hernán Vera fue decretado por resolución de 21 de octubre de 2019, dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, sin condena en costas, lo que significa que Transelec al menos tuvo motivo plausible para litigar. La sentencia del 4° Juzgado de Garantía de Santiago fue confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago mediante resolución de 25 de noviembre del mismo año.

Argumenta del demandado que para acoger cualquier demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: (i) hecho voluntario, lo que supone la capacidad del agente; (ii) imputabilidad vía culpa o dolo; (iii) daño; y (iv) relación de causalidad entre el hecho culpable o doloso y el daño. Así se desprende de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, y lo ha entendido así la doctrina. Señala que en la especie la demanda deberá ser desechada, porque ha sido mal planteada y porque no concurren los requisitos de la responsabilidad extracontractual.

Indica el demandado que es improcedente demandar a la vez, las normas de la responsabilidad por el hecho propio y por el hecho ajeno, pues la demanda invoca la responsabilidad del empleador por el hecho de sus dependientes señalada en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, y la presunción de culpa del artículo 2329 del mismo cuerpo legal, lo que es incompatible, pues los primeros consagran la presunción de culpa por el hecho ajeno y el segundo por el hecho propio, demandando el actor por ambos a Transelec, no pudiendo responderse por ambos a la vez, pues sus requisitos y consecuencias son diferentes para cada uno. Lo correcto sería, indica, era demandar por una responsabilidad en subsidio de la otra.

Tampoco existiría culpa ni dolo señala, pues culpa es señal de ilicitud, y según el relato del actor habría una conducta dolosa o culpable del querellante, cada vez que se sobresee al imputado en una causal penal lo que es inaceptable, pues las personas deben tener derecho a la acción, y Transelec solo ejerció una acción ante los tribunales para resolver un conflicto de relevancia jurídica, siendo un acto autorizado y reconocido por el derecho, el que no puede estimarse ilegal y elimina cualquier clase de responsabilidad. Aun cuando el actor haya resultado sobreseído, el hecho de haberse presentado una querella en su contra no es un



hecho imputable a culpa o dolo de Transelec, porque ésta se limitó a ejercer su derecho a la acción. Salvo situaciones especialmente graves, cuyo no es el caso, el mero ejercicio de una acción judicial que luego es rechazada no puede considerarse culpable o doloso, señala, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia, indica, citando fallos al respecto. Así, no basta, indica que la acción penal sea rechazada, sino que debe ser además ejercida de forma abusiva o de mala fe. De hecho, la demandada indica que ella no solicitó diligencias de investigación intrusivas respecto del actor e incluso se allanó a su sobreseimiento definitivo -no así respecto de otros imputados- cuando lo solicitó. El hecho de existir una discrepancia jurídica no puede conducir sin más a estimar que la conducta de la demandada fue ilícita, máxime si el 4° Juzgado de Garantía de Santiago no la condenó en costas, lo que significa que al menos tuvo motivo plausible para litigar.

Señala que en la investigación penal, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile habría señalado que existiría indicios de efectividad de los hechos investigados, por lo que la querella tendría fundamento plausible. Por tanto, una cosa es que se haya declarado el sobreseimiento del demandante por no ser constitutivo de delito o falta de participación y otra cosa es que los hechos no existan. La regla general es que las sentencias absolutorias penales -o aquellas que decreten el sobreseimiento definitivo- no producen cosa juzgada en los juicios civiles. Los casos en que sí lo hacen son excepcionales y, como toda excepción, son de aplicación e interpretación restrictiva, ello por cuanto el estándar de prueba en penal es mucho más estricto que en materia civil, por lo que es incorrecto sostener que con el sobreseimiento definitivo del señor Vera “se tiene por acreditado el proceder objetiva y absolutamente ilícito de la demandada Transelec S.A. y de sus agentes”, como se plantea en la demanda. Cuando el artículo 179 N°1 del Código de Procedimiento Civil señala que la sentencia que decreta el sobreseimiento definitivo produce cosa juzgada en sede civil en caso de que se funde en “la no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso”, se refiere a que el hecho materialmente no existe; no a que el hecho existe pero no es constitutivo de delito. En consecuencia, del sobreseimiento del actor no se colige la responsabilidad ilícita o culpable de Transelec, debiendo rechazarse la demanda por estas razones.

Tampoco existe, sostiene la demandada, perjuicios que indemnizar pues no son ciertos, debiendo el demandante acreditarlos. En este caso no es posible configurar ningún tipo de daño. En nuestro sistema de responsabilidad el daño es un requisito esencial para que proceda la indemnización de perjuicios, es decir, no existe responsabilidad sin daño. Lo señalado es particularmente relevante en relación con el lucro cesante que se demanda. El lucro cesante reclamado es incierto y, por ende, no indemnizable. Nadie puede asegurar que el actor habría obtenido y seguirá obteniendo los ingresos que reclama por un período de casi 8 años, como se pretende en la demanda. Es decir, el daño que se reclama tiene serios defectos de certidumbre y los daños inciertos no son indemnizables.

Expone que la demandante consciente del defecto de su demanda, recurre ilustrativamente a la figura de la pérdida de una chance y cita varios fallos sobre esta materia. Sin embargo, en ninguna parte de su demanda pide que se le indemnice la pérdida de una chance como tal, sino que siempre encuadra sus supuestos perjuicios en la figura del lucro cesante, por lo que nada podría darse por pérdida de chance. Siendo así, deberá acreditar el lucro cesante reclamado con



los requisitos de certidumbre que se exigen para darlo por establecido, menos aún cuando la empresa para la que trabajaba entró en liquidación, que fue la razón por la que se despidió al actor y no la querella como indica, siendo en consecuencia solo perjuicios eventuales. Además, es también ilusorio que el actor no obtendrá más ingresos en los 8 años o 92 meses que demanda.

También deberá probar la suma solicitada por daño moral, agrega, el que se inexistente pues se demandan \$120.000.000 solo por haber sido objeto de la querella, sin que se decretaran a su respecto diligencias de investigación intrusivas, no se le registraron sus comunicaciones, no fue formalizado y no sufrió prisión preventiva ni ninguna otra medida cautelar. El daño moral debe ser probado por quién lo sufre, pues cotidianamente se ve expuesto al daño por vivir en sociedad, y las molestias no son indemnizables. Los requisitos para indemnizar en casos similares son estrictos, como ocurre con el error judicial tratado en la Constitución, que conlleva privación de libertad y declaración de injustificadamente errónea, no bastando el mero ejercicio de la acción penal para ello, ni que la acción sea desechada, y por último, en los casos donde se ha concedido ello, ha sido por montos menores que los aquí reclamados.

Expone que tampoco existiría en el caso de autos relación de causalidad, pues los ingresos que no percibirá dicen relación con el despido del actor por la empresa donde trabajaba y no de que la querella de Transelec, de hecho, la carta de despido del señor Vera es de fecha 28 de febrero de 2018, mientras que la querella de la demandada fue presentada el 23 de febrero de 2018 y se declaró admisible el 27 de febrero, esto es, un día antes de la terminación del contrato de trabajo del actor. Es imposible que entre ambos hechos exista una relación de causalidad, sea cual fuere la doctrina de la causa que se invoque. Ni siquiera aplicando la doctrina más laxa en materia de causalidad (doctrina de equivalencia de las condiciones) podría aceptarse la tesis del demandante. En efecto, si se hace el ejercicio de suprimir hipotéticamente la presentación de la querella por Transelec, el señor Vera igualmente habría sido despedido por Eldu SpA. Es decir, entre la supuesta pérdida de ingresos de don Heribaldo y la querella de Transelec no existe relación alguna desde el punto de vista normativo. Ergo, los perjuicios alegados no pueden ser jurídicamente atribuibles a la demandada, menos aún cuando se argumenta que el contrato terminó por la finalización de otro contrato civil, y no por la querella.

Argumenta que el lucro cesante y el daño moral son daños indirectos e imprevistos, no indemnizables, por lo que no son normativamente atribuibles a la demandada.

En subsidio de todas las excepciones anteriores, el monto de cualquier eventual indemnización deberá ser reducido substancialmente, ya que deberán descontarse todos los ingresos que el actor haya obtenido u obtenga a cualquier título desde el día en que fue despedido de Eldu SpA hasta que se cumplan los 92 meses posteriores a esa fecha (octubre de 2025), pues de lo contrario estaría indemnizándosele un daño que no ha sufrido ni sufrirá. El actor deberá demostrar que no ha obtenido ni obtendrá ningún ingreso entre el 28 de febrero de 2018 y el 31 de octubre de 2025. Todos los ingresos que reciba o haya recibido en ese período deberán ser descontados de cualquier eventual indemnización.



También deberán descontarse todos los montos obtenidos por el actor de Eletrans S.A. y Eldu SpA. De hecho, indica, en la causa RIT O-1849-2018 del 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago consta que el 29 de junio de 2018 don Heribaldo celebró un avenimiento con Eletrans S.A., la cual se comprometió a pagarle \$20.720.290. Asimismo, en la causa Rol C-3626-2018 del 6° Juzgado Civil de Santiago, sobre liquidación concursal de la empresa Eldu SpA, consta que con fecha 4 de mayo de 2018 el señor Vera verificó un crédito en contra de dicha empresa por el monto de \$74.533.3113, por lo que el actor ya persigue por otras vías la suma de \$95.253.601, que es la base de lo que demanda a Transelec, y lo que debería rebajarse prudencialmente.

A folio 16, con fecha 22 de enero de 2021 consta el trámite de réplica, en la cual el demandante reitera en todas sus partes la demanda por responsabilidad civil extracontractual por hechos propios deducida, señalando que la demandada comprende la misma, pero que el abogado de la demandada señala que ello no constituiría un ilícito civil, lo que se opone al estado de derecho y a diversas disposiciones. Expone que todo lo alagado sobre el contrato no tiene relación con este proceso, por cuanto se alegó en la querella penal que fue sobreseída, y se determinó que los pagos se realizaron en el marco del contrato, créditos en contra de la demandada que hoy se cobran en la liquidación concursal de Eldu Ingeniería que se tramita ante el 12 Juzgado Civil de Santiago.

Reitera lo indicado en relación a las disposiciones del artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, y señala que en el apartado tercero de la contestación de la demanda, se arguye que no se configurarían los requisitos de la responsabilidad extracontractual, lo que no es efectivo pues la demanda verifica que Transelec es responsable por hechos propios cometidos por la sociedad a través de sus agentes. Indica que no hay incompatibilidad en lo pedido, pues la demanda se interpone por el hecho propio, pero solo se indica que también podría haberse solicitado por el hecho de los dependientes.

Reitera y transcribe nuevamente lo señalado en la demanda respecto a la responsabilidad directa de Translec por hechos propios, a pesar de que transversalmente la demanda se refiere a la responsabilidad en ese sentido. A pesar de ello reitera que ambos estatutos jurídicos no son incompatibles, solo se exponen en el libelo para mostrar lo sólido de los fundamentos.

Respecto a la ausencia de culpa o dolo, indica que las imputaciones a su representado de los delitos de apropiación indebida y estafa, fueron tan abusivas que, en el marco de un contrato civil con un tercero ajeno a su parte, en el cual su representado no tenía ninguna participación, Transelec S.A. autorizó estados de pago con base a obra ejecutada verificada por la Inspección Fiscal de la Obra, dio orden de emitir factura, recepción conforme las facturas aludidas y se depositaron dichos fondos en la cuenta corriente de Eldu Ingeniería SpA, siendo grave la confusión de los abogados de Transelec por la imputación realizada, reiterando lo señalado por el Juzgado de Garantía.

Expone que del tenor de la contestación se debería entender que los delitos que imputó lo fueron de buena fe, lo que resulta absurdo y contrario a derecho, por cuanto un querrellado tiene derecho a ser indemnizado civilmente si se le causo daño como ocurre en este caso. Además, no es cierto que se allanó la contraria al sobreseimiento en ambos delitos, pues solo lo hizo de la apropiación indebida y no



de la estafa. Tampoco existiría resolución que exima a la demandada del pago de las costas, no existiendo por esta, motivos plausibles para litigar.

Indica que con el sobreseimiento definitivo de su representado conforme al artículo 250 letras a) respecto del delito de apropiación indebida y b) respecto del delito de estafa, se tiene por acreditado con los antecedentes acompañados, el proceder absolutamente ilícito de Transelec S.A. por hechos propios, cometidos por sus órganos, al tenor del artículo 179 N°1 del Código de Procedimiento Civil, que señala que, la sentencia que decreta el sobreseimiento definitivo produce cosa juzgada en sede civil en caso de que se funden en la no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. Además, los agentes de la demandada tenían certeza de falsedad de las imputaciones que se realizaban, y se acreditará el dolo y mala en el actuar.

Rechaza las alegaciones respecto a que no exista daños y respecto a la relación de causalidad, estos presupuestos se cumplen. Indica además, que se debe precisar que respecto al término del contrato de trabajo del actor con la aludida sociedad Eldu SpA, fue por razones de fuerza mayor y las indemnizaciones laborales respectivas fueron resueltas como lo señala Transelec S.A. al pedir reducción o rebaja de la indemnización demandada en estos autos, la suma ascendente a \$20.720.290.- correspondiente al pago del finiquito laboral que realizó Eldu SpA, al actor. Es necesario establecer, señala, que Eldu SpA, bajo ninguna circunstancia se puede considerar un tercero en estos autos, y esta sociedad ex empleadora del demandante no le produjo ningún daño, como lo pretende y señala la demandada, ello en consideración a que el aludido finiquito laboral cumplió íntegramente las disposiciones legales contenidas en el Código del Trabajo. En efecto el aludido finiquito laboral, cubrió todas las indemnizaciones laborales, por tanto, no existe relación alguna entre el término legal de un contrato de trabajo y esta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ingresos que además no constituyen renta.

Argumenta que probará los exiguos ingresos y sus dificultades laborales producto de la querella de que fue objeto, y que lo verificado en el proceso de liquidación corresponde a finiquitos laborales de otros trabajadores, y no del actor, pues lo único que él recibió fue la suma de \$20.720.290. Ratifica el daño moral demandado, finalizando con la aclaración que la demanda es en contra de Transelec por hechos propios.

A folio 18 con fecha 8 de febrero de 2021 consta el trámite de réplica, por medio del cual la demandada ratifica en todas sus partes la contestación de la demanda y solicita el rechazo de esta última, realizando un breve resumen de lo obrado en el proceso y lo señalado por la demandante en el trámite de réplica. Indica que la réplica exagera situaciones procesales y discursos jurídicos para victimizarse, y señala que no es efectivo que la relación contractual relatada no sea relevante para señalar un contexto adecuado al proceso, reiterando la relación de los hechos que al respecto hizo en la contestación, agregando que al día de hoy no se sabe cuál fue el paradero de los adelantos de dinero entregados a Eldu, y que los hechos no constituyeran delito, no significa que sea una actuación dolosa de Transelec en contra del actor.

Argumenta que conforme los términos de la réplica, se debe entender que el actor ha renunciado a cualquier pretensión relativa a responsabilidad de la



demandada por el hecho de sus dependientes, en consecuencia, indica cualquier eventual responsabilidad de Transelec, sólo podría fundarse en el hecho propio, debido a la actuación de su órgano y en el caso, tratándose de una sociedad anónima, los órganos son la junta de accionistas y el directorio, de modo que el actor tendría que demostrar que la supuesta conducta ilícita habría sido cometida por la junta de accionistas o el directorio de Transelec.

Señala también que la recriminación que se realiza respecto de uno de los abogados que representa a la demandada excede los términos que el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil señalan para los escritos de réplica y dúplica, por lo que el reproche de dolo no debe ser considerado. Agrega que tampoco existe una resolución del Tribunal de Garantía que indique el actuar de la demandada fue doloso o culposo, debiendo el actor probar ello, y que en los hechos, la demandada se allanó al sobreseimiento de ambos delitos respecto del actor, y no solo al de apropiación indebida como sostiene el actor, siendo falso también que la demandada haya sido condenada en costas.

Controvierte la afirmación del demandante sobre que el daño se encuentre probado con los documentos acompañados hasta el momento, no siendo efectivo tampoco que la razón de su despido de parte de su ex empleador sea irrelevante en estos autos, pues el término de su contrato se debió a hechos no relacionados con Transelec.

Respecto al daño moral, indica que el informe acompañado no tiene el mérito de acreditarlo el que además adolece de graves falencias, por lo que el actor deberá acreditar el hecho culpable o doloso de Transelec, no de sus dependientes.

Finaliza solicitando nuevamente el rechazo de la demanda.

A folio 30, con fecha 27 de abril de 2021, consta la realización del trámite obligatorio de conciliación con la asistencia de ambas partes, donde consta que la misma no se produjo.

A folio 32 con fecha 3 de junio de 2021, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la prueba que consta en el proceso.

A folio 95, con fecha 30 de mayo de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: comparece don Heribaldo Vera Millar, quién interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra de Transelec S.A. solicitando le sean resarcidos los perjuicios que le fueron causados en virtud de la querella interpuesta por la demandada en su contra y que se tramitó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a sabiendas de la inexistencia de responsabilidad del actor en los hechos denunciados, terminando la misma con sobreseimiento definitivo respecto a su persona, lo que conllevaría un actuar doloso o al menos culpable de la demandada;

SEGUNDO: Que contestando la demanda Transelec, expone la situación contractual existente con la ex empleadora del actor, el grupo empresarial español Eldu, indicando que habría sido víctima de delitos, y que las querellas interpuestas no son más que el ejercicio del derecho a la acción del que goza, y que el



sobreseimiento dictado, en caso alguno significan una actuación dolosa o culposa de su parte;

TERCERO: Que en consecuencia, la controversia jurídica que este tribunal deberá dilucidar, dice relación con determinar si en los hechos, el actuar de la demandada mediante la interposición de la querella señalada, representa una conducta que reúna los requisitos para generar su responsabilidad extracontractual, que la ponga en posición de resarcir los daños reclamados por el actor;

CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones en el proceso, la parte demandante acompañó en parte de prueba, los siguientes documentos:

A folio 1: 1. Certificado que acredita que la sentencia que sobreseyó definitivamente al demandante de autos, de los delitos de apropiación indebida y de estafa, se encuentra firme y ejecutoriada; 2. Sentencia de sobreseimiento definitivo al demandante de autos, de los delitos de a indebida y estafa; 3. Ebook Penal con todos las resoluciones de 4º Tribunal de Garantía Santiago, que incluye la querella presentada por los representantes de Transelec S.A.; 4. Copia de la declaración del actor ante la Fiscalía Local de Las Condes; 5. Ultimas liquidaciones y carta finiquito del demandante; 6. Copia informe pericial realizado al demandante de autos, por perito de la Corte de Apelaciones de Santiago; 7. Certificado de Título de Abogado, del demandante; 8. Certificado de Título de Ingeniero Comercial en Administración de empresas del demandante; 9. Certificado de Titulo de Contador Auditor del demandante; 10. Certificado de Titulo de Contador Público del demandante; 11. Certificado de Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión del demandante; 12. Certificado de desempeño en Contraloría General de la República del demandante; 13. Certificado de comportamiento funcionario Contraloría General de la República del demandante; 14. Certificado de informe de precalificaciones Contraloría General de la República del demandante; 15. Certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), sobre desempeño Cargo de Contralor Interno; 16. Certificado de selección cargo de segundo nivel jerárquico, concurso Alta Dirección Pública.

A folio 61: 1. Certificado de imposiciones emitido electrónicamente por AFP Provida, de fecha 21 de octubre de 2021, que da cuenta desde el mes de julio de 2015 a la fecha; 2. Documento denominado “Certificado de Cuentas Personales” emitido electrónicamente con fecha 02 de noviembre de 2021, por la AFP Provida; 3. Documento emitido en los procesos de mandos medios y altos cargos públicos emitido por el Servicio de Alta Dirección Pública, denominado “Declaración Especial De Candidatos En Evaluación Gerencial”; 4. 20 certificados emitidos por el Servicio de Alta Dirección Pública, entre el año 2018 a 2021, que corresponden a postulación a cargos de Alta Dirección Pública; 5. Certificado de títulos profesionales, emitido electrónicamente por el Servicio de Registro Civil, con fecha 05 de noviembre de 2021, que acredita la calidad profesional del actor como Contador Público y Auditor, y Abogado; 6. Certificado de Antecedentes del actor, emitido electrónicamente por el Servicio de Registro Civil, con fecha 05 de noviembre de 2021;

QUINTO: Que además de la prueba documental, la parte demandante rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de los testigos, doña Marisol Rojas Torres y doña Carolina Catalán Díaz.



La primera indica que el actor ha cambiado su forma de ser estando en el último tiempo muy depresivo, y sabe además que ha tratado de incorporarse al ámbito laboral pero la demanda le ha traído problemas, lo que lo perjudica pues él es el proveedor de su casa. Indica que ha cambiado incluso con cambios de peso, y que se le ha causado un perjuicio económico pues antes ganaba como 5 millones de pesos aproximadamente y ahora no se ha podido incorporar. Sabe cuánto ganaba pues ella era de la parte contable de la empresa y conocía los números. Expone que dejó de ganar ese sueldo por la quiebra de la empresa pero que él además no se ha podido incorporar a trabajar, le llegan ofertas pero no ha llegado al punto final por el perjuicio de este juicio. Finalmente señala que uno queda en el suelo con una demanda por estafa, la persona no vuelve a ser la misma, y le consta por qué ha cambiado su forma de ser, pues ya no hacia comentarios divertidos como antes.

La testigo señora Catalán, señala que como encargada de recursos humanos, le consta que ganaba el actor un sueldo bruto de \$4.900.000 ya que desde el 2018 cuando fue despedido se le ha hecho difícil encontrar trabajo a raíz de la demanda de estafadores y por el historial, lo que le consta por que revisan el historial. Respecto al daño moral señala que le consta por que se juntaban por el tema del juicio en común, han tenido conversaciones breves y cuando se juntan comenta que esta con problemas económicos, por no tener trabajo estable, lo que acarrea problemas familiares y le ha pedido que le informe si sabe de trabajo. Indica que considera que una causa por la que no ha podido encontrar trabajo es por el juicio de estafa, porque a los puestos que postula revisan antecedentes;

SEXTO: Que además, la parte demandante solicitó un perito tasador para determinar para determinar el daño emergente y lucro cesante demandado, informe que consta a folio 79 evacuado por doña María Luisa Chaperon designada por el tribunal. Asimismo, a folio 87, consta el peritaje psicológico solicitado por la parte, y evacuado por doña María Gabriela Armas Arancibia, destinado a acreditar el daño moral demandado;

Finalmente, a folio 86 consta además la absolución de posiciones solicitada por el demandante respecto de don Arturo Le Blanc Cerda, representante de la demandada,

SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada incorporó la siguiente prueba documental a folio 66: 1. Certificado de fecha 2 de junio de 2021, por el cual la jefe de Unidad de Administración de Causas del Tribunal certifica que en la causa penal no existe pronunciamiento por parte del tribunal en relación a condenar en costas; 2. Resolución de fecha 8 de junio de 2021 que cita a audiencia a fin de discutir la condena en costas y su eventual tasación para el día 12 de julio de 2021; 3. Acta de audiencia de fecha 12 de julio de 2021, que contiene la resolución del Tribunal en orden a rechazar la solicitud de condena y regulación de costas presentada por el demandante; 4. Copia de Escritura Pública de reunión extraordinaria de directorio Eldu Pine SpA (ahora "Eldu Ingeniería SpA") de 22 de diciembre de 2016; 5. Carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 28 de febrero de 2018, enviada por Eldu SpA al demandante, en el que consta que la causal de término es "Necesidades de la Empresa"; 6. Escrito de avenimiento presentado con fecha 29 de junio de 2018 en causa RIT O-1849-2018 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada "Rojas y otros con Eldu SpA y otra", en el que consta que el demandante recibe indemnizaciones y prestaciones



laborales por un total de \$20.720.290; 7. Resolución de fecha 4 de julio de 2018 que aprueba el avenimiento referido.

Además, la parte demandada generó la absolución de posiciones del actor, la que consta a folio 89;

OCTAVO: Que tradicionalmente nuestra doctrina y jurisprudencia, han estimado que para que se configure la responsabilidad extracontractual y en consecuencia, la parte demandada se encuentre en posición de indemnizar los perjuicios causados o reclamados por la parte demandante, es menester que se cumplan determinados requisitos. Siguiendo la doctrina del Profesor Gonzalo Figueroa Yáñez, estos requisitos deben ser: a) Una acción u omisión del agente; b) Un factor de imputabilidad de la responsabilidad, es decir que la acción u omisión se haya efectuado con culpa o dolo del agente; c) Que se haya producido daño a la víctima; d) Una relación de causalidad entre el la acción u omisión del agente del años y el daño que se la producido a la víctima, es decir que sea consecuencia directa el segundo de lo primero, y; e) La capacidad del agente del año para actuar y consecuencia producir el mismo. A todos estos requisitos algunos autores y en especial el profesor Abeliuk ha agregado uno adicional, esto es, la no concurrencia de una causal de exención de responsabilidad, como podría ser un caso fortuito o una culpa de la víctima.

En consecuencia, y a la luz de lo expuesto, corresponde ahora revisar el cumplimiento de los requisitos ya señalados, para efecto de determinar la existencia de una responsabilidad como la alegada en estos antecedentes;

NOVENO: Que con respecto a la acción u omisión realizada por la demandada, el actor imputa a la demandada la interposición de una querella criminal en su contra por los delitos de estafa y apropiación indebida, la que fue tramitada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y que culminó con un sobreseimiento definitivo del actor por ambos delitos.

Con la prueba aparejada documental legalmente acompañada y no objetada, se ha logrado acreditar que efectivamente en los autos RIT 1548-2018 RUC 1810008340-6 seguidos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la demandada Transelec representada por el abogado don Juan José Piríz García de la Huerta, presentó con fecha 23 de febrero de 2018 una querella en contra de don Antonio Arrieta Larrucea, Iñaki Gorostiza Artabe, don Luis María Escondrillas Wencel, don Hernán Vera Millar – el actor -, don José Gandarias Torres y don Jon Arteta Ocerín por los delitos de estafa y apropiación indebida, sancionados en los artículos 467 inciso final y 470 N° 1 del Código Penal, respectivamente.

Además, se logró acreditar que el día 21 de octubre de 2019 se sobreseyó definitivamente a todos los querellados individualizados en el párrafo anterior del delito de apropiación indebida, y con la misma fecha se sobreseyó únicamente al actor y a don Antonio Arrieta Larrucea, del delito de estafa. Posteriormente, el día 25 de noviembre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó en parte la resolución anteriormente reseñada dictada por el Juzgado de Garantía, y acogiendo la solicitud de la defensa dispuso el sobreseimiento definitivo de todos los imputados por el delito de estafa. A la fecha, todas estas resoluciones se encuentran firmes y ejecutoriadas.

Todo lo anterior, a pesar de no ser negado por la parte demandada en los escritos de fondo, se acredita con los documentos acompañados por la demandante, en específico, los siguientes: Certificado que acredita que la sentencia



que sobreseyó definitivamente al demandante de autos, de los delitos de apropiación indebida y de estafa, se encuentra firme y ejecutoriada; sentencia de sobreseimiento definitivo al demandante de autos, de los delitos de a indebida y estafa; e ebook penal con todas las resoluciones de 4º Tribunal de Garantía Santiago, que incluye la querella presentada por los representantes de Transelec S.A.;

DÉCIMO: Que de lo anterior, se acredita fehacientemente como se indicó, que los hechos a los que la parte demandante le atribuye el carácter de generadores de la responsabilidad civil extracontractual que alega, es decir, el carácter de ilícito civil, efectivamente existieron, por cuando efectivamente la demandada Transelec se querelló en contra del actor, y efectivamente también, el actor fue sobreseído de ambos delitos que le fueron imputados por sentencia que hoy se encuentra firme.

Ello de todos modos, únicamente acredita que se cumple el primer requisito de la responsabilidad alegada, por cuanto, el resto de las particularidades de los hechos denunciados, su alcance, la relación con los contratos y otros antecedentes, deberán ser analizados junto al resto de los elementos de la responsabilidad;

DÉCIMO PRIMERO: Que lo anterior, y no existiendo dudas – como se razonará extensamente a continuación – que la demandada no hizo más que ejercitar un derecho que la ley le confiere, nos encontramos frente a un caso de abuso del derecho, pues el mismo se habría ejercitado con el solo ánimo de perjudicar al actor.

Así las cosas, y respecto a este abuso del derecho, nuestra Corte de Apelaciones ha señalado:

“DÉCIMO: ... En esta materia, la doctrina mayoritaria en nuestro país, que cuenta entre sus autores a los profesores Arturo Alessandri Rodríguez, Fernando Fueyo Laneri y Enrique Barros Bourie, aceptan el abuso de derecho como fuente de responsabilidad extracontractual, el primero, al entender que se genera cuando su titular lo ejerce dolosa o culpablemente, con la intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios (“De la responsabilidad civil extracontractual, Ed. Jurídica.”); el segundo, en su proposición de tratar la materia en la Parte General o Título Preliminar del Código Civil, sosteniendo que “Los derechos subjetivos, públicos y privados, no podrán ejercitarse abusivamente, sino conforme a las exigencias de la buena fe, el orden público y las buenas costumbres imperantes...” (“Instituciones de Derecho Civil Moderno”). Y por último, el profesor Enrique Barros nos señala que “El ejercicio de un derecho, si de él deriva daño mediante dolo o culpa, se transforma en la comisión de un delito o cuasidelito civil que, como fuente de obligaciones se rige por los preceptos del Título XXXV del Libro IV del Código Civil; también se ha entendido que la teoría de abuso del derecho se funda en el “ejercicio doloso o culposo de un derecho” y “constituye un ilícito especial del que nuestra legislación positiva nos otorga varios ejemplos”. Lo característico del abuso del derecho es que la conducta o acción de la cual deriva la responsabilidad consiste precisamente en el ejercicio antijurídico. La conducta, al igual que cualquier otra, resulta ser dolosa o culposa de acuerdo al régimen general de responsabilidad. En este sentido, para atribuir responsabilidad, es posible distinguir dos tipos de abuso del derecho: el ejercicio doloso y el ejercicio culpable de un derecho.” (Barros, Enrique. “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile. Página 648).



A su vez, el profesor Pablo Rodríguez Grez, con motivo de lo mismo, señala “El abuso del derecho consiste, entonces, en exceder el interés jurídicamente protegido por el derecho positivo al instituirse la norma que lo consagra. Este es el único límite jurídico en su ejercicio. Más allá del interés o fuera del interés que se permite realizar, se actúa al margen del derecho, de hecho, infringiendo el ordenamiento positivo. Por consiguiente, no se abusa del derecho, sino de una apariencia, de un espejismo, de una sombra que no corresponde a una realidad concreta”. (Rodríguez Grez, Pablo. “El Abuso del Derecho y El Abuso Circunstancial. Editorial Jurídica de Chile, pág. 138).” (Corte de Apelaciones de Santiago, 8 de marzo de 2022, rol 14.692-2.018).

En consecuencia, resta ahora valorar la prueba para acreditar que el resto de los requisitos generadores de la responsabilidad alegada se configuran en la especie, pero en especial, como señalan los autores, el factor de atribución de culpa o dolo;

DÉCIMO SEGUNDO: Que conforme lo razonado, corresponde ahora hacerse cargo por este sentenciador del segundo de los requisitos expresados en los considerandos anteriores, es decir, que la actuación de la demandada fue realizada con culpa o dolo, para con ello configurar así un factor de imputación de la responsabilidad.

Como ya se esbozó en el considerando anterior, la interposición de una querella criminal o penal por parte de una persona ya sea natural o jurídica en nuestro país corresponde una manifestación de su derecho a la acción y de petición garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 numerales 2, 3, 7 y 14, que en su conjunto resguardan lo que junto a otras normas se denomina el debido proceso, es decir, un estado en el cual las personas tienen garantizados el ejercicio de sus derechos a la acción judicial, en el caso que nos convoca como querellante o denunciante de un delito que señala afectarle por un aparte, y como imputado, por la otra, resguardando todos los derechos que le asisten para que se siga en su contra un debido proceso, eliminando todo atisbo de abuso que pueda quebrantar su presunción de inocencia.

Así las cosas, el solo hecho de haber ejercido una acción judicial de carácter penal, no puede de pleno derecho o *per se* considerarse un acto culpable o doloso, es decir un ilícito de carácter civil, pues la parte quién interpuso la acción y en consecuencia puso en movimiento el mecanismo judicial, no hace más que ejercer su derecho constitucional a accionar judicialmente, que como vimos, se encuentra contemplado en las normas constitucionales ya citadas, y además en específico y detalladamente en cuanto a la regulación de su ejercicio en las normas recogidas en el Código de Procesal Penal. Por ello, si a este hecho se le quiere atribuir un carácter de culposo o doloso, ello deberá ser acreditado específicamente por la parte quién lo alega, en este caso la demandante, conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil;

DÉCIMO TERCERO: Que en la demanda, para acreditar este carácter de doloso, o a lo menos culposo de la acción judicial que se ejerció, indica que la demandada interpuso la querella a sabiendas que al actor ninguna responsabilidad le cabía en los hechos denunciados, y que ello se prueba con el hecho de que el actor fue sobreseído por ambos delitos, en virtud de las causales establecidas en los artículo 250 letra a) en el caso de la apropiación indebida, y letra b) ambos del Código Procesal Penal en el caso del delito de estafa.



A este respecto, y a modo ilustrativo, el artículo 250 del Código Procesal Penal, en su parte pertinente, dispone: “Sobreseimiento definitivo. El juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo: a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito; b) Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;...”. Como se señaló supra, se encuentra acreditado en el proceso que la sentencia que declaró el sobreseimiento definitivo se encuentra firme y ejecutoriada, y en consecuencia en lo que respecta al señor Vera, respecto al delito de apropiación indebida se determinó que los hechos objeto de la querella, no eran constitutivo de delito, y respecto al delito de estafa se estableció claramente la inocencia del imputado.

Así, habiéndose razonado ya que la demandada no hizo más que ejercer su derecho constitucional y legal a la acción penal, menester era probar por el demandante esta actuación “a sabiendas” de la parte demandada – señalada en el primer párrafo de este considerando -, para así por una parte quebrar o torcer el halo de licitud que resguarda el ejercicio de un derecho constitucional como el realizado por Transelec, y acreditar con ello, por otra parte, que esta actuación culposa o dolosa de la demandada, estaba destinada a terminar con el sobreseimiento en que finalizó, precisamente por cuanto esta última, actuó sabiendo que no cabía responsabilidad al actor y que solo se movió en un ánimo de perjudicarlo;

DÉCIMO CUARTO: Que con la prueba documental no objetada acompañada en autos, en especial con el documento acompañado por la parte demandante denominado Ebook de la causa penal, se acredita que con fecha 23 de febrero de 2018 Translec interpuso la querella en comento, entre otros, en contra del actor. La misma fue declarada admisible el día 27 de febrero del mismo año y se remite al Ministerio Público para su tramitación. Posteriormente, el día 10 de septiembre de 2019, a solicitud de la defensa particular de la que gozó el actor y los otros querellados en el proceso, se citó a una audiencia para el 21 de octubre de 2019, para discutir del sobreseimiento definitivo en la causa, audiencia que se realizó en dicha fecha con los resultados ya reseñados, es decir el sobreseimiento del actor por ambos delitos. Con ello se concluye que la causa estuvo en poder del Ministerio Público, al menos entre el mes de febrero de 2018 a octubre de 2019, solicitándose la audiencia de discusión del sobreseimiento por parte de la parte querellante, y no del ente persecutor, quién por mandato constitucional tiene en sus manos el dirigir las diligencias investigativas para esclarecer los hechos en el ámbito penal.

Así, se ha acreditado que luego de interpuesta la querella, y luego de más de un año de investigación se sobreseyó al querellado por las causales señaladas, pero no existe prueba alguna que acrediten a este sentenciador que al momento de interponerse la querella, y de poner la demandada en movimiento la maquinaria jurisdiccional, lo hizo solamente con el ánimo de perjudicar al actor, lo que constituiría el dolo, o a sabiendas que el actor no tenía injerencia ni participación alguna en los hechos y solo se buscó su desprestigio, lo que configuraría su actuar culposos.

Por el contrario, el hecho de que la defensa particular del actor haya demorado más de un año en solicitar el sobreseimiento, dice relación con que se realizaron diligencias investigativas y en consecuencia, se debió determinar la existencia o no de los delitos denunciados, lo que se corrobora, con la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 25 de noviembre de 2019,



que revocó la decisión del Tribunal de Garantía y sobreseyó a todos los imputados, resolución que en su considerando tercero señala que comparte la gravedad de los actos materia de la querella, pero que no dejan de ser incumplimiento propios de una relación comercial en el contexto de una relación contractual que unía a las partes. Abona a lo anterior, el voto en contra de la Ministra señora Book, quién estuvo por confirmar la decisión del Juzgado de Garantía, es decir, no sobreseer al resto de los imputados.

Si bien estas decisiones no empecen al demandante, pues su sobreseimiento no estaba en discusión ante la Corte de Apelaciones, lo razonado se vuelve atendible desde que ello se da en el marco de la misma investigación penal, que era objeto de revisión por el tribunal de segunda instancia.

Ello, se debe analizar a la luz del artículo 114 del Código Procesal Penal que permite al juez de garantía no admitir a tramitación una querella cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito, y que como ya se señaló, no aconteció en este caso, por lo que se debió realizar una investigación – cuyo contenido este tribunal desconoce por no haberse presentado como prueba en el proceso – para arribar a las conclusiones a las que arribaron los tribunales señalados, ello, interpretando lo obra jurisdiccionalmente únicamente en armonía con las normas que regulan el proceso penal.

En este orden de ideas, que el querellante y ahora demandado se hubiere allanado a la solicitud de sobreseimiento en la totalidad de los delitos respecto del imputado, debe interpretarse, al no existir otra prueba que lo desmienta, como una respuesta a los hechos investigados, más que a un ánimo ilícito civil en contra del actor, ante la ausencia de cualquier otra prueba para acreditar una intención a este respecto;

DÉCIMO QUINTO: Que tampoco es posible acreditar este factor de atribución con la prueba confesional solicitada y rendida por ambas partes, pues en ella tampoco se logra probar la culpa o dolo de la demandada, pues en la confesional de la demandada no se hace mención alguna a dichos factores de atribución limitándose a indicar que el actor era un ejecutivo de la empresa demandada y otras particularidades del contrato, y en la prueba solicitada por la demandada, el actor se limitó a realizar opiniones personales de los hechos, pero que como ya se han analizado, no se ven reforzados o acreditados con otro medio probatorio en el proceso.

Así, al no haberse acreditado en autos la existencia de un factor de atribución de responsabilidad de la demandada, es decir, la culpa o dolo en su conducta, esta demanda deberá ser rechazada en su totalidad, resultando inoficioso emitir pronunciamiento específico respecto de los otros requisitos de la responsabilidad alegada;

DÉCIMO SEXTO: Que sin perjuicio de que con lo anterior se cae el segundo requisito de la responsabilidad extracontractual, el factor de imputabilidad, y con ello, menester será rechazar la acción interpuesta como se indicó, este tribunal se hará cargo de otros antecedentes probatorios incorporados al proceso, que no permiten tener por acreditadas las imputaciones de responsabilidad demandadas por el actor.

En su declaración ante la Fiscalía, documento presentado por la parte demandante sin objeción ni tacha de falsedad, al declarar el día 28 de octubre de 2018, el actor indica al Fiscal que su trabajo consistía “básicamente en coordinar las



funciones de administración y finanzas en la empresa Eldu SpA y en subcontratación cumplía funciones similares para Eldu Ingeniería SpA”, sociedad esta última que era quién tenía la relación comercial con la demandada, y en consecuencia, por la vía de la subcontratación el actor sí tenía un vínculo laboral que lo relacionaba con el ámbito de administración y finanzas de la empresa con quién la demandada de estos autos tuvo los problemas contractuales, por lo que, el actor no era un tercero absolutamente extraño en esta relación como lo hace ver en su demanda.

De los documentos acompañados por la parte demandada, legalmente ofrecidos y no objetados, consistentes en certificado de fecha 2 de junio de 2021, por el cual la jefe de Unidad de Administración de Causas del Tribunal certifica que en la causa penal no existe pronunciamiento por parte del tribunal en relación a condenar en costas, la resolución de fecha 8 de junio de 2021 que cita a audiencia a fin de discutir la condena en costas y su eventual tasación para el día 12 de julio de 2021, y acta de audiencia de fecha 12 de julio de 2021, que contiene la resolución del Tribunal en orden a rechazar la solicitud de condena y regulación de costas presentada por el demandante, se logra acreditar que efectivamente en la causa penal no existió una condena en costas al demandado, por cuanto ello no fue solicitado en la audiencia por la defensa, como acredita el certificado de 2 de junio de 2021, y lo corrobora la resolución contenida en el acta de audiencia de 12 de julio del mismo año en que la Magistrado del Cuarto Juzgado de Garantía indica que no puede regular algo que no está decretado.

Siendo tradicionalmente la condena en costas el modo en que los tribunales tienen de sancionar la buena o mala fe de los litigantes en un proceso judicial, la ausencia de condena a este respecto, no permite a este sentenciador tener ni siquiera luces de cual fue el razonamiento del juez penal en este punto. Ciertamente es también que el actor tenía a su haber la acción penal del artículo 211 del Código Penal, conocida como delito de querrela calumniosa, pero dicha acción tampoco fue ejercida, por lo que en materia penal, ninguna prueba existe respecto a una delimitación o prueba del actuar doloso o culposo de la parte demandada;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que conjuntamente con lo señalado en el considerando anterior, el actor razona profusamente en los escritos de fondo respecto a la merma o desaparición de sus oportunidades laborales, principalmente en los concursos del Sistema de Alta Dirección Pública en los cuales participa y en los que ha centrado sus postulaciones laborales dado el currículum que posee, en los cuales se exige una conducta intachable, por lo que, la existencia de la querrela interpuesta en su contra, no le permiten avanzar en dichos procesos.

Para acreditar estos dichos, el actor acompañó, mediante documentos no objetados, sus certificados de título de contador auditor, abogado e ingeniero comercial con lo cual se acreditó que el actor ostenta las mencionadas 3 profesiones, mediante títulos otorgados por diversas universidades del país, además de un post grado en contabilidad y auditoría. Ello se corrobora además por el certificado de profesiones emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Por otra parte para probar sus postulaciones a los cargos de Alta Dirección Pública y la imposibilidad de avanzar en ellos, acompañó 20 certificados que acreditan dichas postulaciones y un documento denominado “Declaración Especial de Candidatos en Evaluación General”, en el que, conforme a los dichos del actor,



se solicita la información de causas judiciales pendientes, e impediría que avanzara en dichos procesos. En dicho documento se aprecia que Servicio Civil solicita se informe "...de cualquier antecedente relacionado a los siguientes numerales: b) Causas judiciales en actual tramitación...". Posteriormente dicho documento cita el artículo 2º letra w) del Título III de la Ley 19.882, que indica que "Corresponderá a la Dirección Nacional del Servicio Civil: w) requerir, respecto de aquellos candidatos que integran alguna nómina información para verificar antecedentes referidos al cumplimiento de las exigencias derivadas de la probidad administrativa, inhabilidades e incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses. Para tal efecto, podrá consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen o simple delito de acción pública, inhabilidades declaradas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos o sanciones administrativas de separación o destitución de empleos o cargos públicos."

Como se aprecia de ambas partes del documento, las inhabilidades dicen relación con causas judiciales en actual tramitación, juicios pendientes, condenas por crímenes o simples delito, e inhabilidades declaradas por sentencia judicial, pero ninguna de todas estas hipótesis afecta al actor, pues como se ha señalado, el mismo fue sobreseído definitivamente en la querella interpuesta por la demandada, no existiendo causa alguna en su contra.

Así las cosas, no se ha acreditado norma legal que indique la imposibilidad de postulación o de acceso al cargo en virtud de los antecedentes que al actor actualmente y al momento de interponer esta demanda le afectaban;

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto al resto de la prueba que no fue analizada, en especial documental, pericial y testimonial, ella en nada hacer variar lo decidido, pues la misma tiene por objeto acreditar los perjuicios alegados, respecto a los que, como se señaló en el considerando anterior, no se emitirá pronunciamiento.

Por su parte, en cuanto a la prueba documental acompañada por la parte demandada y no expresamente valorada, la misma tenía por objeto desestimar los perjuicios alegados, por lo que no se valora por la misma razón ya señalada;

DÉCIMO NOVENO: Que habiéndose desechado la demanda en todas sus partes, la parte demandante deberá pagar las costas del proceso.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 2314, 2319, 2320 y 2329 del Código Civil; 144, 170 179, 180, 254 y siguientes, y 341 y siguientes todos del Código de Procedimiento Civil y demás pertinentes, se declara:

- I. **QUE SE RECHAZA** la demanda interpuesta en todas sus partes;
- II. Que se condena en costas al demandante.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don MAURICIO SEGOVIA ARAYA, Juez Suplente del Quinto Juzgado Civil de Santiago.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art.
162 del C.P.C. en **Santiago, dieciocho de Julio de dos mil veintidós**

